



**FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO**
DE SAN LUIS POTOSÍ

ACUERDO DE RESERVA TOTAL NÚMERO

FGE/DDST/AR/46/2024

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y
TECNOLOGÍAS.**

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2024

**ASUNTO: Acuerdo Reserva recaído en la solicitud de
información UT-SI-P-416-240469824000416-2024.**

Nombre de la entidad

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

I. La fuente y el archivo donde se encuentra la información

La Fuente es la información reportada por los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, los cuales suministran la información contenida en sus carpetas de Investigación y/o Averiguaciones Previas.

Las Bases de Datos de los sistemas de registro y captura de información, en las cuales se resguardan los datos suministrados por los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Investigador.

II. La fundamentación y motivación del acuerdo:

Con oficio número FGE-UT-1950-2024, suscrito por la Lic. Jessica Erika Ludivina Acosta Correa, Directora de Transparencia y Acceso a la Información de la Fiscalía General del Estado, de fecha 10 de octubre del año en curso, se solicitó a esta Dirección a mi cargo dar respuesta a la solicitud con número de folio UT-SI-P-416-240469824000416-2024 presentada el día 10 diez de octubre de 2024 a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en la cual solicita:

“Del 26 de septiembre del 2021 al 26 de septiembre del 2024; cuántas denuncias penales presentó la Dirección General de Pensiones del Estado, por qué delitos, y si es posible contra quién.”[SIC]

Al tratarse de personas morales me permito exponer el siguiente criterio establecido por la Suprema de Corte de Justicia de la Nación:

Registro digital: 2001402

Instancia Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materia Constitucional, Común

Tesis: I.4o.A.2 K (10a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2, página 1875



PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS COMPATIBLES CON SU NATURALEZA.¹

Del preámbulo y del contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se advierte, en principio, que los derechos que reconoce son sólo los inherentes a la persona humana, pues aquél hace referencia expresa a los "derechos esenciales del hombre", y el artículo 1, numeral 2, del propio ordenamiento, prevé que persona es todo ser humano. Por otra parte, la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, constituye un cambio de paradigma en el orden jurídico nacional, pues dicho precepto ahora dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual implica reconocer a los tratados referidos a derechos humanos un carácter particular, equiparable a las normas constitucionales, conformando un nuevo bloque de constitucionalidad, en la medida en que aquéllos pasan a formar parte del contenido de la Constitución, integrando una unidad exigible o imponible a todos los actos u omisiones que puedan ser lesivos de derechos fundamentales. En estas condiciones, si bien es cierto que el Órgano Reformador de la Constitución no dispuso expresamente como titulares de los derechos consagrados en ella a las personas jurídicas, como sí se hace en otras normas fundamentales e instrumentos internacionales como la Constitución Alemana o el Protocolo No. 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, también lo es que el texto constitucional citado alude lisa y llanamente al término "personas", por lo que de una interpretación extensiva, funcional y útil, debe entenderse que no sólo se orienta a la tutela de las personas físicas, sino también de las jurídicas, en aquellos derechos compatibles con su naturaleza, como los de acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad, propiedad y los relativos a la materia tributaria, entre otros (como lo es la protección a sus datos personales), máxime que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido explícitamente, en el caso Cantos vs. Argentina, que las personas jurídicas, en determinados supuestos, son titulares de los derechos consagrados en el Pacto de San José, al reconocer el de constituir asociaciones o sociedades para la consecución de un determinado fin y, en esta medida, son objeto de protección. Además, México ha suscrito un sinnúmero de pactos internacionales en los que ha refrendado el compromiso de respetar los derechos humanos en su connotación común o amplia, lo que incluye la relación y sentido que a la institución se atribuye en el ámbito nacional, pero también el reconocido en otras latitudes, reforzando el corpus iuris aplicable que, como bloque de constitucionalidad, recoge la Constitución Mexicana y amplía o complementa a convenciones, en particular a la inicialmente mencionada. Refuerza lo anterior el hecho de que a partir de la nueva redacción del artículo 1o. constitucional y de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo del acatamiento a lo ordenado en el caso Radilla

¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación.

<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2001402>

Consultada el 14 de octubre de 2024.



Pacheco, registrada bajo el número varios 912/2010, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, **las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de la forma más benéfica para la persona, lo que implica que no necesariamente hay una jerarquía entre ellas**, sino que se aplicará la que ofrezca una protección más amplia; en esta medida, si diversos instrumentos internacionales prevén como titulares de derechos humanos a las personas jurídicas, debe seguirse esta interpretación amplia y garantista en la jurisprudencia mexicana.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 782/2011. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.

Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción I y 22 fracciones II y III del Reglamento Interno de la Fiscalía General del Estado; me permito hacer de su conocimiento que de acuerdo a una consulta exhaustiva en las bases de datos que de conformidad a las facultades y atribuciones se albergan en esta Dirección **se encontraron registros en las bases de datos de denuncias correspondientes a carpetas de investigación presentadas por la Dirección de Pensiones del Estado en el periodo del 26 de septiembre del 2021 al 26 de septiembre del 2024**, motivo por el cual se solicita la clasificación de los registros encontrados.

No omito manifestarle que la oportunidad, veracidad e integridad de la información proporcionada, es responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, quienes son los encargados de alimentar las bases de datos con las que cuenta esta Dirección a mi encargo.

Fundamento: Derivado de lo anterior, podemos decir que toda persona tiene derecho al acceso a la información, y este derecho es garantizado por el Estado, sujetando su ejercicio a diversos principios y bases, prevaleciendo entre otros el de máxima publicidad, como criterio establecido para todas las autoridades administrativas, jurisdiccionales e incluso legislativas, responsables de garantizar el cumplimiento de acceso a la información pública, sin más restricciones que las debidamente establecidas conforme a derecho, sin embargo resulta necesario entender la relación entre el derecho a la información y sus límites, cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, es por ello que, si se reconoce que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el apartado A fracción I de la fracción 6 que *toda la información en posesión de cualquier*



autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública **y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.** En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información; aunado a lo anterior la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 09 nueve de mayo de 2016, con última reforma publicada el 08 de abril de 2024, reglamenta el ejercicio del derecho a la información pública y señala que debe considerarse **información pública: “la que es creada, administrada o en posesión de los sujetos obligados, exceptuando la clasificada como reservada o confidencial.” (artículo 3 fracción XIX de la Ley en cita).**

Por lo anterior las figuras jurídicas de excepción al derecho de acceso a la información pública son las de información reservada, e información confidencial; la citada – LTAIPSLP- en su artículo 120 señala los momentos en los que se puede realizar la clasificación de información y en este caso aplica el supuesto establecido en la **fracción I, es decir, cuando se reciba una solicitud de acceso a la información.**

La fundamentación, se encuentra en el artículo **129 fracción XII de la –LTAIPSLP-, el cual establece que se considera información reservada, las que por disposición de una Ley tenga tal carácter**, concatenado con el numeral Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 quince de abril de 2016, con última reforma publicada en el en el Diario Oficial de la federación el 18 dieciocho de noviembre de 2022, establece:

“Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 13, fracción XIII de la Ley General, podrá considerarse como información, aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no contravenga lo establecido en la Ley General.

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter.”

Robusteciendo lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 2014, con última reforma publicada el 26 de enero de 2024, señala expresamente en su artículo 218:



"Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

Los registros de la investigación, así como **todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados**, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables."

Siento las partes los sujetos del procedimiento penal establecidos en el artículo 105:

"Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal

Son sujetos del procedimiento penal los siguientes:

- I. La víctima u ofendido;
- II. El Asesor jurídico;
- III. El imputado;
- IV. El Defensor;
- V. El Ministerio Público;
- VI. La Policía;
- VII. El Órgano jurisdiccional, y
- VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso."

Motivación: De conformidad con lo antes vertido la información solicitada podrá actualizar la causal establecida en la fracción 129 fracción XII de la -LTAIPSLP, toda vez, que entra en el supuesto de tratarse de información estrictamente reservada que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala en su artículo 218 en el que únicamente las partes podrán tener acceso a los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados; siendo las partes o sujetos del procedimiento la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el Órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

Es decir, la información que nos ocupa referente a **conocer el número de denuncias penales que presentó la Dirección General de Pensiones del Estado, por qué delitos, y contra quién, del 26 de septiembre del 2021 al 26 de septiembre del 2024**, son registros que obran dentro de las Carpetas de Investigación, y como se citó solo las partes pueden tener acceso al contenido de la misma, asimismo el dar a conocer información contenida dentro de actos de investigación podría repercutir en el avance de las investigaciones y el resultado que se pretende obtener, divulgar la información afectaría la actividad esencial de la Fiscalía General del Estado que es la de procurar justicia y defender los intereses de la sociedad en general, las víctimas u ofendidos del delito, por lo que se tiene el deber de proteger los acto de investigación contenidos en las Carpetas de Investigación.



Por lo tanto, con fundamento en lo anterior resulta procedente **RESERVAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA**, consistente en:

“Cuántas denuncias penales presentó la Dirección General de Pensiones del Estado, por qué delitos, y si es posible contra quién, en el periodo comprendido del 26 de septiembre del 2021 al 26 de septiembre del 2024”

III. El documento, la parte o las partes de los mismos, que se reservan;

La clasificación de la información reservada es de manera total respecto a:

- 1) Cuántas denuncias penales presentó la Dirección General de Pensiones del Estado
- 2) Por qué delitos fueron presentadas
- 3) Contra quién fueron presentadas

en el periodo comprendido del 26 de septiembre del 2021 al 26 de septiembre del 2024

IV. El plazo por el que se reserva la información;

Es menester mencionar que, en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecen en qué momento puede darse a conocer los registros de las Carpetas de Investigación:

“La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.” [SIC]

La investigación de una carpeta de Investigación que deriva de un hecho presuntamente constitutivos de delito se lleva a cabo mediante etapas las cuales requieren de tiempo que



en la mayoría de las ocasiones no dependen directamente de ella, e inclusive de otras dependencias, y en su caso de los recursos que pueda realizar la parte acusada, por lo que es inasequible señalar el tiempo en el que se puede integrar, y resolver una carpeta de investigación, así como, establecer una fecha estimada en la que se tendría la resolución correspondiente, competencia exclusiva del juzgador, considerando entonces que el plazo elegido es el estrictamente necesario para proteger la información.

Dicho lo anterior, el plazo de reserva de la información se establece acorde a lo dispuesto por el artículo 115, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia del Estado el plazo por el que se acuerda la reserva es por cinco años contados a partir del **día 15 quince de octubre de 2024 y el plazo concluye el 15 quince de octubre de 2029** y podrá reservarse por cinco años más, previa solicitud formulada por la autoridad generadora de la información.

Concatenado al artículo 115 antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia del Estado, concatenado con el numeral Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas, el cual cita:

“Trigésimo cuarto. El periodo máximo por el que podrá reservarse la información será de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que el Comité de Transparencia confirme la clasificación del expediente o documento.

[...]

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco años adicionales, siempre y cuando se justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación” [SIC]

Se podrá dar acceso a la información reservada, en el momento de la emisión de la resolución definitiva que causa estado, como acto decisorio donde se plasma el contenido de las reflexiones y criterios del órgano colegiado en su plenitud, en congruencia con el cúmulo de constancias procesales, y no necesariamente con actos de mera propuesta.

Por lo que, su naturaleza no permite señalar o fijar un periodo concreto, toda vez que será pública, una vez que causé estado la resolución que se llegó a emitir, circunstancia que no puede establecerse con precisión.

V. La designación de la autoridad responsable de su protección;

La Dirección de Desarrollo de Sistemas y Tecnologías de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, la cual es la responsable de resguardar la información.



VI. Número de identificación del acuerdo de reserva:

Se registra como: Acuerdo de Reserva total FGE/DDST/AR/46/2024.

VII. La aplicación de la prueba del daño:

En cuanto a la fracción VII del artículo 128 de la –LTAIPSLP- se realiza la prueba de daño, adminiculándolo con lo establecido con la fracción XII del artículo 129, y a lo señalado por el artículo 118 de la Ley en cita haciendo un análisis de caso por caso como se precisa a continuación:

ARTÍCULO 118. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

- a). La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público;*
- b). El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y*
- c). La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

Aunado a lo anterior, el numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, establece que:

Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba daño a la que hace referencia el artículo 104 de Ley General, concatenado con el artículo 118 de la LTAIPSLP, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:

- I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;*
- II. Se deberá motivar la clasificación, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acrediten el vínculo entre la difusión de la información y la afectación al interés público o a la seguridad nacional;*
- III. Se deberán precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría un riesgo de perjuicio real, demostrable e identificable al interés jurídico tutelado de que se trate*
- IV. Mediante una ponderación entre la medida restrictiva y el derecho de acceso a la información, deberán justificar y probar objetivamente mediante los elementos señalados en la fracción anterior, que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio que supera al interés público de que la información se difunda;*
- V. Deberán elegir y justificar la opción de excepción al derecho de acceso a la información que menos lo restrinja y que sea adecuada y proporcional para evitar el*



perjuicio al interés público, evitando siempre que sea posible la reserva absoluta de documentos o expedientes; y

VI. En los casos en que se determine la clasificación total de la información, se deberán especificar en la prueba de daño, con la mayor claridad y precisión posible, los aspectos relevantes de la información clasificada que ayuden a cumplir con el objetivo de brindar certeza al solicitante.

Aplicando la prueba del daño preciso las razones objetivas por las que divulgar la información causa un daño mayor que el interés de conocerla:

Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;

Se invoca a la fracción I del artículo 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, el cual señala los momentos en los que se puede realizar la clasificación de información, y en el caso aplica el supuesto establecido en la fracción I, es decir, cuando se reciba una solicitud de acceso a la información, como es el caso que nos ocupa que la información requerida es realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia mediante el folio UT-SI-P-416-240469824000416-2024.

Asimismo, se funda la causal aplicable para la reserva de la información solicitada en el artículo **129 fracción XII de la -LTAIPSLP-, el cual establece que se considera información reservada, las que por disposición de una Ley tenga tal carácter,** concatenado con el numeral Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 quince de abril de 2016, con última reforma publicada en el en el Diario Oficial de la federación el 18 dieciocho de noviembre de 2022.

Por lo anterior, el disposición legal que le da el carácter de información reservada se encuentra protegido por el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 218, el cual establece que *“los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables”*.

Robusteciendo lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 2014, con última reforma publicada el 26 de enero de 2024, señala expresamente en su artículo 218:



"Artículo 218. Reserva de los actos de investigación

Los registros de la investigación, así como **todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados**, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables."

Siento las partes los sujetos del procedimiento penal establecidos en el artículo 105:

"Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal

Son sujetos del procedimiento penal los siguientes:

I. La víctima u ofendido;

II. El Asesor jurídico;

III. El imputado;

IV. El Defensor;

V. El Ministerio Público;

VI. La Policía;

VII. El Órgano jurisdiccional, y

VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso."

La disposición legal que le da el carácter de información reservada se encuentra protegido por el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 218, el cual establece que "los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables".

Solo los sujetos obligados tienen acceso a los registros de la investigación y los documentos contenidos dentro de la Capeta de Investigación, la información solicitada no es susceptible de ser publica, debido a que podría **desencadenar posibles represalias contra la vida o integridad física de la víctima, del presunto, testigos, familiares e incluso de los servidores públicos**, así como ocasionar obstáculos en la conducción de la etapa de investigación, pues como lo establece el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es durante la etapa de investigación que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, de ser el caso.

El acceso a la justicia y reparación del daño causado se verían menoscabados al dar a conocer información como lo conocer el número de denuncias penales presentadas por la Dirección General de Pensiones del Estado, por parte de quien pudiera tener acceso a la información y el uso que le dieran a los datos, ocasionaría que no se llegara a las conclusiones necesarias para cumplir con el objeto de la investigación.



Se deberá motivar la clasificación, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acrediten el vínculo entre la difusión de la información y la afectación al interés público o a la seguridad nacional

Modo: Bajo este criterio la reserva de información se realiza con motivo de evitar un perjuicio significativo y de imposible reparación, ya que al hacerla pública podría repercutir en la vida e integridad física de la víctima, del presunto, testigos y hasta familiares, así mismo su divulgación podría ser utilizada para evadir la acción de la justicia u obstaculizar las acciones y/o los actos de investigación de las autoridades Ministeriales, y repercutir en los avances obtenidos hasta el momento o futuros.

Tiempo: la reserva de información en tanto no cause estado de la resolución que se llegó a emitir, se considera el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio significativo en el desarrollo de la investigación, al darse la divulgación de la información que nos ocupa, podría vulnerar la integridad de los sujetos del proceso penal y de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías de Investigación siendo estos susceptibles de ataques u atentados en contra de su integridad física.

El ministerio público tiene a cargo de llevar las etapas citadas, las cuales requieren de tiempo para reunir los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos, o en su caso, todos los datos de pruebas para el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y finalmente lograr una reparación del daño, así como los recursos que pueda realizar la parte acusada, por lo que es inasequible señalar el tiempo en el que se puede integrar, y resolver una carpeta de investigación, así como, establecer una fecha estimada en la que se tendría la resolución correspondiente, competencia exclusiva del juzgador, por lo que se considera que el plazo de reserva para proteger la información es por cinco años contados a partir del **día 15 quince de octubre de 2024 y el plazo concluye el 15 quince de octubre de 2029**, y podrá reservarse por cinco años más, previa solicitud formulada por la autoridad generadora de la información.

Lugar: Atendiendo al ámbito de competencia territorial, se trata de todo el territorio del Estado de San Luis Potosí, asimismo, podría afectar a otras entidades puesto que las actividades de procuración de justicia se pudieran realizar de forma coordinada con otras Fiscalías Estatales.

El Ministerio Público investigara los hechos que pudieran ser constitutivos de delito cometidos dentro del territorio del Estado de San Luis Potosí, así como aquellos que causen efectos dentro de él, aunque hayan sido ejecutados fuera de éste.

Se deberán precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría un riesgo de perjuicio real, demostrable e identificable al interés jurídico tutelado de que se trate.



Es **real** porque la divulgación de la información relacionada a conocer el número de denuncias penales presentadas por la Dirección General de Pensiones del Estado, el delito y el probable imputado podría entorpecer las investigaciones y repercutir en el avance y resultado que se pretende obtener en las mismas.

Asimismo, tener acceso a la información pone en riesgo la vida privada, la imagen pública y el derecho a la intimidad de los sujetos procesales contenidos en la Carpeta de Investigación, al respecto, la Suprema corte de Justicia de la Nación ha reconocido como derechos fundamentales de las personas, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, sirve de sustento a lo anterior la siguientes Tesis

Época: Décima Época

Registro: 2005522

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 3, febrero de 2014, Tomo I

Tesis: P. II/2014 (10a.)

Página: 274

PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD.²

El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la Protección de Datos Personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la Protección de Datos Personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo,

² Suprema Corte de Justicia de la Nación.

<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005522>

Consultada el 14 de octubre de 2024.



constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.

Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas.

El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número II/2014 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce.

De ahí que, el derecho a la intimidad es derecho de todo individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona; mientras que el derecho a la propia imagen es el derecho de decidir, de forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás.

Es **identificable** ya que al hacerse pública la información permitiría dar a conocer el número de denuncias penales presentadas por la Dirección General de Pensiones del Estado, el delito y el probable imputado, pudiendo ser utilizada como insumo para las partes y derivar en la evasión de la acción de la justicia, así como menoscabar el nivel, capacidad de respuesta o estrategia de investigación de esta Fiscalía General ante conductas delictivas, propiciando que cualquier personas interesada en la información solicitada pudiera emplearla para causar daños en la seguridad y a la paz social; y

Es **demostrable** en razón de que divulgar la información afectaría la actividad esencial de la Fiscalía General del Estado que es la de procurar justicia y defender los intereses de la sociedad en general, las víctimas u ofendidos del delito, reparar el daño y propiciaría que las víctimas se abstengan de denunciar posibles hechos delictuosos en el futuro, así como el aumento de delitos cometidos al no demostrar la presunta responsabilidad de los imputados, así como tutelar los derechos de las personas que encuentran vinculadas en la investigación

Mediante una ponderación entre la medida restrictiva y el derecho de acceso a la información, deberán justificar y probar objetivamente mediante los elementos señalados en la fracción anterior, que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio que supera al interés público de que la información se difunda;



Es Indudable que el acceso a la información, al ser un derecho fundamental, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a las autoridades a respetarlo, protegerlo y garantizarlo.

Si bien es cierto el derecho de acceso a la información que le asiste al solicitante, le permite obtener documentos que se encuentren en los archivos de la Fiscalía General del Estado, el Acceso a la Información que se ejerce por parte del solicitante no es absoluto y su ejercicio está sujeto a diversos principios, bases y limitantes, ya que, si bien prevalece entre otros principios el de máxima publicidad, está sujeto a las restricciones establecidas en la propia norma Constitucional y que se reglan en la legislación secundaria.

Robusteciendo lo anterior y en base a una ponderación de derechos me permito hacer de su conocimiento que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en el ámbito de su competencia promueve, respeta, protege y garantiza el derecho humano de acceso a la información de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad acorde a lo estipulado por el artículo 1 párrafo tercero de la Constitución; por lo que ante todo ejercicio de todo derecho a la información que haga un particular se analiza la proporcionalidad entre la invasión que pudiera ocasionarse por la divulgación de información y el interés público de la información.

Sirve de sustento a lo anterior la siguientes Tesis Jurisprudencial de la 9ª Época, con Registro: 169574, emitida por el Pleno, con Fuente el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, junio de 2008. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 54/2008. Página: 743

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.³

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede

³ Suprema Corte de Justicia de la Nación.
<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191967>
Consultada el 14 de octubre de 2024.



generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral pública, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.

Citando lo anterior la Fiscalía General del Estado que es un ente que defiende los intereses de la sociedad mediante la procuración de justicia y reparación del daño, dar a conocer información solicitada pone en riesgo la vida privada, intimidad y dignidad de las personas que son sujetas de procedimiento penal, y que son asuntos que aún no han concluido, es decir, no cuentan con resoluciones ejecutoriadas, pudiendo interferir con el desarrollo de la investigación; y contando los probables responsables con elementos pudieran utilizar para evitar el ejercicio de la acción penal.

Si bien es cierto existe el derecho de acceso a la información también lo es que dicho derecho debe tener una utilidad pública, y en este caso no se detecta que la información solicitada lo sea.

Es por ello que al haber disposiciones que mandatan su reserva y que no interfiere en el ejercicio del derecho de acceso a la información; en este caso prevalece el derecho a la seguridad social, la paz, el Derecho a la justicia y al debido proceso en la investigación y la persecución de los delitos sobre el derecho de acceso a la información el cual no es absoluto

Deberán elegir y justificar la opción de excepción al derecho de acceso a la información que menos lo restrinja y que sea adecuada y proporcional para evitar el perjuicio al interés público, evitando siempre que sea posible la reserva absoluta de documentos o expedientes; y

La limitación de acceso a la información, en este caso la clasificación de reserva, obedece al riesgo de poner en riesgo la investigación de las Carpetas de Investigación que aún no han concluido, como ya se expuso en supra líneas, asimismo, previendo que para ejercer el derecho de acceso a la información no se requiere acreditar personalidad ni el interés jurídico, se desconoce quién y con qué finalidad solicite la información, trayendo como consecuencia la afectación a la conducción e las investigaciones.



La Clasificación de reserva de la información encuadra su fundamento en el artículo 129 fracción XII de la –LTAIPSLP– concatenado con el numeral Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas, los cuales **establecen que se considera información reservada, las que por disposición de una Ley tenga tal carácter**, como lo es el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo que “los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables”.

Es por ello que al haber disposiciones que expresamente mandatan su reserva no interfiere en el ejercicio del derecho de acceso a la información; el acceso a la información pública tiene sus limitaciones, en donde no toda la información en posesión del sujeto obligado puede ser difundida, como lo es conocer el número de denuncias penales que presentó la Dirección General de Pensiones del Estado, por qué delitos, y contra quién, del 26 de septiembre del 2021 al 26 de septiembre del 2024, clasificar la información solicitada encuadra en el marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información pública aplicable y al difundir la información la Fiscalía General del Estado estaría incumpliendo en la obligación de no reservar información que expresamente tiene ese carácter.

Por lo anterior, reservar la información representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio que se pudiera ocasionar.

Sirve de sustento a lo anterior la siguientes Tesis

Época: Décima Época

Registro: 2000234

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. VIII/2012 (10a.)

Página: 656

INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).⁴

⁴Catálogo de Derechos Humanos

<https://www.catalogoderechoshumanos.com/2000234-2/>

Consultado el 14 de octubre de 2024



Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

EN LOS CASOS EN QUE SE DETERMINE LA CLASIFICACIÓN TOTAL DE LA INFORMACIÓN, SE DEBERÁN ESPECIFICAR EN LA PRUEBA DE DAÑO, CON LA MAYOR CLARIDAD Y PRECISIÓN POSIBLE, LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA QUE AYUDEN A CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE BRINDAR CERTEZA AL SOLICITANTE.



Precisando con mayor claridad, dar a conocer información sobre el número de denuncias penales que presentó la Dirección General de Pensiones del Estado por qué delitos, y contra quién, del 26 de septiembre del 2021 al 26 de septiembre del 2024, es el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio significativo en el desarrollo de la investigación, al darse la divulgación de la información que nos ocupa, podría vulnerar la integridad de los sujetos del proceso penal y de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías de Investigación siendo estos susceptibles de ataques u atentados en contra de su integridad física.

Aunado a lo anterior, el artículo 218 establece que los registros de la investigación, así como **todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados**, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables, siendo las partes; siendo las partes o sujetos del procedimiento la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el Órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

Es menester hacer mencionar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que incurrirá en falta administrativa el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan, por ejemplo, el registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos, conforme al artículo 49 fracción V de la Ley en comento.

Adicionalmente, el Código Penal Federal en su artículo 225, fracción XXVIII, es claro en señalar que se considera delito contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos el dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.

Por lo anterior, se determina que la información solicitada respecto a conocer el número de denuncias penales que presentó la Dirección General de Pensiones del Estado, por qué delitos, y contra quién, en el periodo comprendido del 26 de septiembre del 2021 al 26 de septiembre del 2024 es clasificada como reservada.

VIII. Fecha del acuerdo de clasificación, y

La fecha en que se emite 15 de octubre de 2024.



**FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ**

IX. La rúbrica



LI. CARLOS ALBERTO RAMOS RAMÍREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS

De conformidad con el artículo 128, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, el cual refiere que, el acuerdo que clasifique la información como reservada deberá contener la rúbrica de los miembros del Comité, se procede en consecuencia.

MAESTRA XITLÁLIC SANCHEZ SERVÍN
VICEFISCAL JURIDICA Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.




LICENCIADO JOSE PEDRO GÓMEZ ÁVILA
VICEFISCAL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LICENCIADO JUAN MANUEL WILLIE ROSILLO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

Esta hoja corresponde al acuerdo de reserva total número FGE/DDST/AR/46/2024 de la Dirección de Desarrollo de Sistemas y Tecnologías, emitido el 15 de octubre de 2024, y que se anexa al oficio: FGE/DDST/2471/2024 que se turna por la Dirección de Desarrollo de Sistemas y Tecnologías al Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado.



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

| | | |
|---|---|---|
|  <p>FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ</p> | FECHA DE CLASIFICACIÓN. | 15 DE OCTUBRE DE 2024 |
| | ÁREA. | DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA |
| | ACUERDO. | FGE/DDST/AR/46/2024 |
| | INFORMACIÓN RESERVADA | LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADA ES DE MANERA TOTAL, EN RELACIÓN A CONOCER EL NÚMERO DE DENUNCIAS PENALES PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES DEL ESTADO |
| | PERIODO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA | A PARTIR DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024 Y EL PLAZO CONCLUYE EL 15 DE OCTUBRE DE 2029. |
| | FUNDAMENTO LEGAL. | ARTÍCULO 3º FRACCIONES II, XI, XIII, XXI, XXXV, 120 FRACCIÓN I, 129 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LINEAMIENTO TRIGÁSIMO SEGUNDO, DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN; ARTICULO 105 Y 218 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES |
| | AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA. | PODRÁ RESERVARSE POR CINCO AÑOS MÁS, PREVIA SOLICITUD FORMULADA POR LA AUTORIDAD GENERADORA DE LA INFORMACIÓN. |
| | RUBRICA DEL TITULAR DEL ÁREA. |  |
| | FECHA DE DESCLASIFICACIÓN | 15 DE OCTUBRE DE 2029 |
| | RUBRICA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DEL TESTADO. |  DIRECTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA. |